

## **Resumen de “Breve historia contemporánea de la Argentina” (Romero)**

### **Capítulo 9 – “La gran transformación, 1989-1999”**

El 9 de Julio de 1989, el presidente Alfonsín entregó el mando al electo Carlos Saúl Menem.

Éste inició su gobierno en medio de una crisis formidable: la hiperinflación, desatada en abril, se prolongó hasta agosto; en julio la inflación fue de 200 %, y en diciembre todavía se mantenía en el 40 %. Mientras todo el mundo convertía sus australes en dólares, grupos de personas desesperadas asaltaron tiendas y supermercados, y la represión dejó varios muertos.

Para enfrentar esta crisis existía una receta genérica elaborada en el mundo en la década anterior, y reelaborada para América Latina en el llamado “Consenso de Washington”, transmitida por el FMI y el Banco Mundial, y difundida por economistas y periodistas, que fueron conformando un nuevo sentido común: era necesaria una profunda transformación de la relación entre el Estado y la sociedad, tal como estaba funcionando desde 1930. Esta receta decía que los gastos del Estado benefactor eran excesivos. Subsidios y prebendas restaban eficiencia a la economía y agravaban el déficit fiscal, que se saldaba con emisión monetaria. La persistente inflación había desembocado finalmente en el colapso fiscal. La solución consistía en una drástica reforma y un ajuste del Estado que a la vez suprimiera el déficit fiscal y liberara a la economía de una tutela asfixiante. Menem decidió seguir la línea que había iniciado Martínez de Hoz y que había ensayado Alfonsín al final, sin poder ni convicción. Percibió el riesgo de la hiperinflación y también la oportunidad: había tanta necesidad social de orden público y estabilidad que las reformas, hasta entonces rechazadas, resultarían tolerables y además le permitirían reunir el apoyo necesario para consolidar su poder.

Dando un gran giro, abjuró del “estatismo”, alabó la “apertura”, proclamó la necesidad y la bondad de las privatizaciones y se burló de quienes “se habían quedado en el 45”; se abrazó con el almirante Rojas, se rodeó de los Alsogaray (padre e hija), y confió el Ministerio de Economía a un alto directivo de Bunge y Born.

El Congreso sancionó dos grandes leyes, que daban al Ejecutivo grandes prerrogativas: la ley de emergencia económica, que suspendió todo tipo de subsidios, privilegios y regímenes de promoción, y autorizó el despido de empleados estatales, y la ley de reforma del Estado, que declaró la necesidad de privatizar una extensa lista de empresas estatales.

Rápidamente se privatizaron la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y Aerolíneas Argentinas. Se convocó a grupos mixtos, integrados por empresarios locales,

operadores internacionales y banqueros que aportaban títulos de la deuda externa que fueron cambiados por activos empresariales. A su vez, se les aseguró a las nuevas empresas un sustancial aumento de tarifas, escasas regulaciones y una situación casi monopólica. Así, en poco menos de un año, se habían privatizado la red vial, los canales de televisión, buena parte de los ferrocarriles y de las áreas petroleras de YPF. También se proclamó la apertura económica.

Pese a la mejora en los ingresos, sobre todo por los fondos de las privatizaciones, no se alcanzó el equilibrio fiscal y la inflación se mantuvo alta. A fines de 1989 se produjo una segunda hiperinflación, con saqueos y pánico. El nuevo ministro de Economía, Antonio Erman González, actuó de manera drástica: con el Plan Bonex se apropió de los depósitos a plazo fijo de los ahorristas, que cambió por bonos en dólares de largo plazo. A eso agregó una fuerte restricción de los pagos estatales y de la circulación monetaria. La inflación se redujo, pero a costa de una fortísima recesión que, al cabo de un año, había deprimido los ingresos fiscales. Para solucionarlo, se apeló de nuevo a la emisión y la inflación volvió a desatarse. A fines de 1990, con la economía en estado crítico, estalló el escándalo del *Swiftgate*.

El embajador estadounidense denunció que el frigorífico Swift era presionado por miembros del círculo presidencial que reclamaban coimas para permitir la sanción de determinados decretos. La intervención del gobierno estadounidense provocó una serie de cambios y rotaciones en el gabinete que, a principios de 1991, llevaron al Ministerio de Economía al entonces canciller Domingo Cavallo.

Cavallo encaró al problema de la inflación con la ley de convertibilidad, que durante diez años marcó las pautas de la economía. Se estableció la paridad cambiaria fija; emblemáticamente, un dólar equivaldría a un nuevo “peso”, y se prohibió al Poder Ejecutivo emitir moneda por encima de las reservas, de modo de garantizar esa paridad. El Estado consiguió desalentar las perspectivas inflacionarias, pero a costa de renunciar a su más importante instrumento de intervención en la economía.

Los resultados inmediatos fueron muy exitosos: cayó la inflación y también la fuga de divisas, volvieron capitales emigrados, bajaron las tasas de interés, hubo una rápida reactivación económica y mejoró la recaudación fiscal.

La convertibilidad fue reforzada por otras dos disposiciones. La reducción general de aranceles concretó la apertura económica. Para mejorar rápidamente la recaudación fiscal se elevaron los impuestos más fáciles de cobrar –Valor Agregado (IVA) y Ganancias-. Por otra parte, la Dirección General Impositiva (DGI) logró una mejor recaudación persiguiendo a los evasores, incluso a los “ricos y famosos”, y el número tributario personal (el CUIT) se convirtió en el nuevo documento de identidad.

Con las cuentas fiscales mejoradas y con suficientes pruebas sobre la seriedad del rumbo adoptado, el gobierno pudo renegociar su deuda externa, en el marco del Plan Brady, acordando un plan de pagos razonable. La Argentina volvió a ser confiable para los inversores globales. Entre 1991 y 1994, entró al país una cantidad considerable de dólares, con los que el Estado cumplió sus compromisos y saldó su déficit, y las empresas se

reequiparon.

Cavallo avanzó en las reformas estructurales iniciadas en 1989: para achicar el déficit fiscal, el Estado nacional transfirió a las provincias la mayoría de los servicios de salud y educativos. Se continuó con la venta de las empresas del Estado, pero la privatización de las de electricidad, gas y agua incluyó garantías de competencia, mecanismos estatales de regulación y control, y la venta de acciones a particulares. YPF fue privatizada por etapas: primero se la fraccionó, se vendieron las refinerías y se entregó a los contratistas las áreas con reservas comprobadas de petróleo, que pudieron exportar libremente. Luego se vendieron las acciones; diversas agencias del Estado conservaron una cantidad importante, y los trabajadores otra parte. Con los ingresos se saldaron deudas con los jubilados, lo que sirvió para atenuar las opiniones adversas.

A su vez, se encaró la privatización del régimen previsional, lo que generó resistencias, que se expresaron en el Congreso, y finalmente se acordó mantener en parte el régimen estatal. Se avanzó también con la flexibilización del régimen laboral, aunque los sindicatos pudieron evitar algunos cambios importantes, lo mismo que con la desregulación de las obras sociales. Con las provincias se firmó un Pacto Fiscal, para que acompañaran la política de reducción de gastos, pero se tuvo una amplia tolerancia con el empleo de recursos fiscales para paliar los efectos del ajuste. La provincia de Buenos Aires recibió un sustancioso Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense.

En los primeros tres años, el Producto Bruto creció en forma sostenida, a tasas más que respetables, la inflación cayó drásticamente, creció la actividad económica y el Estado mejoró su recaudación y hasta gozó de un par de años de superávit fiscal, en buena medida debido a los ingresos por la privatización de empresas. El consumo se expandió, con créditos pactados en dólares; muchas personas viajaron al exterior y otras compraron artículos importados, abaratados por la baja de aranceles.

Esta bonanza ocultó por un tiempo los aspectos más duros de la gran transformación, particularmente el desempleo, que pasó del 7 % al 12 % en 1994. Cada privatización estuvo acompañada de una elevada cantidad de despidos, sobre todo en las empresas estatales. Los efectos se disimularon al principio, pero explotaron a partir de 1995.

Cerraron muchas empresas privadas, que sufrieron la competencia de los productos importados; sobrevivieron las que se tecnificaron, incorporaron nuevas maquinarias y redujeron su personal, y también las que se convirtieron en importadoras. Otros sectores eran golpeados por el congelamiento de sus haberes, como los empleados estatales o los jubilados, por el encarecimiento de los servicios públicos (debido a su privatización).

Lejos de replegarse, el Estado desplegó una importante actividad destinada a paliar los costos de la transición a algunos sectores o empresarios seleccionados. La Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha distintos planes destinados a lo que se llamó la reconversión de los desocupados, como por ejemplo el estímulo a los microemprendimientos, pero fue una acción esporádica e ineficiente. Más consistente fue el apoyo a los grandes empresarios: la industria automotriz recuperó casi todos sus beneficios y los grandes exportadores, perjudicados por el peso sobrevaluado, recibieron

distintas compensaciones fiscales. A los contratistas del Estado se les permitió participar de las privatizaciones en condiciones ventajosas.

Para sobrevivir día a día, sortear el déficit y honrar los compromisos con los acreedores externos, se hicieron necesarios nuevos préstamos. Pero ya la decisión no dependía del FMI sino de inversores globales, como los grandes fondos de inversión, por lo cual la economía argentina se tornó muy vulnerable.

Esto se manifestó a principios de 1995 por el “efecto Tequila”, consistente en una devaluación en México, que produjo una corrida mundial de inversores que abandonaron los mercados emergentes. En la Argentina hubo un retiro masivo de fondos externos, se precipitaron el déficit fiscal y la recesión, y la desocupación trepó al 18 %. El gobierno respondió con una poda presupuestaria, reducción de sueldos estatales, fuerte aumento de impuestos y un consistente apoyo del FMI y del Banco Mundial. En lo inmediato, la crisis fue superada. El sistema bancario pudo ser superado, aunque unos cuantos bancos cerraron o fueron vendidos. El PBI, que cayó el 4 % en 1995, se recuperó en 1996 y avanzó con fuerza en 1997, creciendo por encima del 8 %. Pero la desocupación no cedió y se mantuvo cerca al 15 %.

Por la eficacia ante esta crisis, el gobierno fue premiado electoralmente en 1995 y Menem –que había conseguido reformar la Constitución- fue reelecto con amplitud. Mientras tanto, la deuda externa había pasado de 60 mil millones de dólares en 1992 a 100 mil en 1996. La economía argentina se hizo dependiente del flujo de capitales extranjeros y de las volátiles decisiones de los inversores.

Cuando se restringió el flujo hubo recesión y el gobierno tuvo que abandonar el diseño de largo plazo y limitarse a capear la situación.

Cavallo fue quien sintió el impacto primeramente. El ministro salió con éxito de la crisis de 1995. Inició una nueva serie de privatizaciones –el Correo, las centrales nucleares-, declaró la emergencia previsional y restringió los fondos transferidos a los gobiernos provinciales, que se vieron obligados a hacer un ajuste. Fue entonces que los propios políticos peronistas empezaron a ir contra Cavallo, que empezó a tener cruces con gente del círculo íntimo del presidente, por ejemplo a partir de la ley de patentes medicinales o la privatización del correo.

Su relación con Menem se rompió y en Julio de 1996 fue reemplazado por Roque Fernández. Éste elevó los impuestos, redujo el número de empleados públicos y recortó el presupuesto. Además, impulsó las privatizaciones pendientes: el Correo, los aeropuertos y el Banco Hipotecario Nacional, y vendió las acciones de YPF en manos del Estado. El sector político del gobierno puso obstáculos y fue así, por ejemplo, que fracasó en el Congreso el proyecto sobre flexibilización laboral. Incluso fracasó Menem que trató de sortear la situación mediante un Decreto, que fue objetado por la Justicia.

De modo que, en vísperas de elecciones decisivas, el gobierno enfrentó el desafío de encontrar un balance entre los criterios fiscales del ministro de Economía y los criterios electorales de los políticos.

Luego de electo, en 1989, Menem procedió a ampliar los márgenes del poder del Ejecutivo: las leyes de emergencia y de reforma le dieron importantes atribuciones. Con la ampliación de la Corte Suprema –en la que designó cuatro miembros de su confianza-, se aseguró la mayoría; la Corte falló en favor del Ejecutivo en cada situación discutida y hasta avanzó por sobre jueces y cámaras, mediante el recurso del *per saltum*. Para eliminar controles y restricciones, removió a casi todos los miembros del Tribunal de Cuentas y al fiscal general, nombró por decreto al procurador general de la Nación, redujo el rango institucional de la Sindicatura General de Empresas Públicas y desplazó o reubicó a jueces o fiscales cuyas iniciativas resultaban incómodas. Cuando el Congreso empezó a cuestionar algunas de sus iniciativas, Menem recurrió a los vetos parciales de las leyes y a los Decretos de Necesidad y Urgencia.

Menem se concentró en la política, pero no se ocupó de las cuestiones de administración, que dejó a un grupo de colaboradores, como los ministros Corach, Dromi o Cavallo. En la quinta de Olivos, transformó esa residencia en una suerte de Corte a la que asistía frecuentemente su círculo íntimo. “El jefe” concedía a sus fieles protección e impunidad y distribuía con generosidad los frutos de un tráfico de influencias practicado sin disimulo. Cavallo a menudo entró en conflicto con las huestes presidenciales y, preocupado por la opinión de los inversores extranjeros, intentó corregir las formas más groseras de la corrupción y los escándalos, como el de Amira Yoma, cuñada del Presidente, que apareció vinculada con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

El peronismo de 1989 ya no era el de antes. Menem no necesitó ni de la plaza ni del balcón, sino que se manejaba visitando programas de televisión populares, opinando sobre los temas más diversos. Por su parte, el movimiento “renovador” del peronismo se disolvió y muchos de sus dirigentes se incorporaron a la caravana menemista. En la provincia, Cafiero fue reemplazado por Eduardo Duhalde, electo gobernador en 1991 y reelecto en 1995, quien construyó en la provincia un sólido aparato político.

Entre los sindicalistas, Saúl Ubaldini intentó nuclear a los golpeados por las reformas, pero Menem logró la adhesión de otros sindicalistas. Muchos dirigentes obtuvieron beneficios personales, y algunos gremios como Luz y Fuerza o la Unión Ferroviaria, transformados en organizaciones empresarias, aprovecharon las prebendas de la privatización.

Las elecciones para gobernador de 1991 fueron un éxito para Menem. La excepción fue un pequeño grupo de diputados, “los ocho”, que encabezados por Carlos “Chacho” Álvarez, abandonaron el partido.

Fuera del peronismo, la oposición política fue mínima: la UCR no pudo remontar el descrédito de 1989, al punto que en 1993 perdió en la Capital Federal, un distrito históricamente adverso al peronismo.

En 1990 Menem clausuró el flanco militar, cerrando el proceso iniciado en 1983. La cuestión militar tenían dos aspectos: el castigo a los responsables del terrorismo de Estado y el sostenido reclamo de los “carapintadas” que pedían la remoción de la conducción del Ejército. Menem había establecido sólidos contactos con ellos.

A fines de 1989 los indultó, junto con militares procesados, jefes guerrilleros y responsables de la guerra de Malvinas, dentro de su político más general de reconciliación, completada en diciembre de 1990, cuando indultó a los integrantes de las Juntas Militares condenado en 1985. Poco antes de ese segundo indulto, los “carapintadas” se habían sublevado nuevamente, reclamando el cumplimiento de la promesa de Menem respecto a remover el mando militar. Éste ordenó reprimirlos y los mandos militares acataron la orden. Los responsables fueron juzgados y encarcelados. Poco después asumió la jefatura de gobierno el general Martín Balza, quien logró mantener la disciplina y la subordinación del Ejército al poder civil. El presupuesto militar fue drásticamente reducido y se privatizaron numerosas empresas militares. En 1994 murió el conscripto Omar Carrasco, lo que culminó con la supresión del servicio militar obligatorio.

Un apoyo similar encontró Menem en la Iglesia, en el cardenal Antonio Quarracino, arzobispo de Buenos Aires. Éste moderó a los disconformes con las políticas gubernamentales, y Menem lo acompañó en la defensa de las posiciones más tradicionales, como el rechazo del aborto y el “derecho a la vida”.

Otro apoyo importante lo obtuvo de los presidentes estadounidenses. Menem estableció excelentes vínculos personales con George Bush y, luego, con Bill Clinton. El canciller Guido Di Tella estableció “relaciones carnales” con los EEUU: la Argentina abandonó el Movimiento de Países No Alineados, se clausuró el Proyecto Cóndor de construcción de misiles, se respaldaron todas las posiciones internacionales de los Estados Unidos y se los acompañó en sus empresas militares, enviando tropas al Golfo Pérsico y a la ex Yugoslavia. Esto le valió dos importantes atentados: uno en la embajada de Israel y otro en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Di Tella inició negociaciones con Inglaterra sobre las Islas Malvinas y postergó la cuestión de la soberanía. En 1991 zanjó todas las cuestiones limítrofes con Chile, a excepción de la Laguna del Desierto y los Hielos Continentales.

De a poco fueron surgiendo algunos incipientes movimientos de resistencia frente a las reformas menemistas: trabajadores de empresas privatizadas, empleados de estados provinciales, jubilados y docentes. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y luego el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) lograron coordinar sus protestas en la Marcha Federal, en 1993 y un posterior paro general, al que no adhirió la CGT. Ese mismo año se produjo una pueblada en Santiago del Estero.

Desde 1991, Menem comenzó a plantear la cuestión de su reelección, lanzando la consigna “Menem 95”, para lo que requería una reforma constitucional. El problema estaba en el Congreso, donde la reforma debía ser habilitada en ambas Cámaras, por dos tercios de los votos. En 1993, Menem logró la aprobación del Senado y convocó a una consulta popular, no vinculante, para presionar a los diputados de la oposición. La UCR estaba dividida, pues Alfonsín se oponía. Sin embargo, en noviembre de 1993 Menem y

Alfonsín acordaron en secreto – el “pacto de Olivos”- las condiciones para la reforma constitucional, que contendría la cláusula de reelección y una serie de modificaciones impulsadas por la UCR: elección directa, con balotaje, reducción del mandato a cuatro años, con la posibilidad de una reelección consecutiva, creación del cargo de jefe de Gabinete, designación de los senadores por voto directo, elección directa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creación del Consejo de la Magistratura y reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia. El partido radical lo aceptó a regañadientes, pero en el resto del ámbito opositor el rechazo fue importante.

En las elecciones para convencionales de 1994 el justicialismo perdió votos y la UCR sufrió un drenaje en beneficio del Frente Grande, opuesto a la reforma. Era una fuerza política nueva, que reunía a los peronistas disidentes de Chacho Álvarez, grupos socialistas de mocristianos y a defensores de los derechos humanos como Graciela Fernández Meijide. En las elecciones presidenciales de 1995 Menem, acompañado por Carlos Ruckauf, logró prácticamente el 50 % de los votos, ganándole a una UCR debilitada y al Frente para un País Solidario (FREPASO), que sumaba al Frente Grande un nuevo grupo peronista disidente encabezado por José Bordón.

Al finalizar la década de los noventa, Argentina era un país nuevo en cualquiera de sus dimensiones, muy distinto a la vieja Argentina de décadas anteriores. Las políticas de la década menemista contribuyeron a esa transformación, pero no fueron el único factor, sino que ésta estaba en marcha desde mediados de los setenta y Menem le dio un fuerte impulso.

En lo económico, el Estado redujo la asistencia estatal a muchos sectores a través de promociones o subsidios, hubo una apertura de la economía a los capitales y a los bienes importados y, como alternativa, se promovieron las exportaciones.

Las consecuencias fueron variadas: el golpe más fuerte lo recibió el tradicional sector industrial volcado al sector interno. Una parte importante de las empresas debió cerrar, en especial las pequeñas y medianas, y sólo sobrevivieron las que pudieron reconvertir sus procesos de producción. Algunas se convirtieron en importadoras; muchas otras se vendieron a empresas extranjeras. Estas empresas ocupaban a muchos trabajadores, de modo que los cierres y la tecnificación –sumado a los despidos en las empresas estatales privatizadas- produjo un gran contingente de desocupados.

Hubo también ganadores, sobre todo entre quienes consiguieron aprovechar las nuevas prebendas estatales o mantener las antiguas. Los grandes grupos nacionales, contratistas del Estado, se asociaron con los consorcios internacionales para adquirir las empresas del Estado. La mayoría vendió pronto su participación y dedicó esa ganancia extraordinaria a consolidar su núcleo principal. Las automotrices, nunca desprotegidas, encontraron su solución integrando su producción con plantas brasileñas al amparo del Mercosur. El gobierno alentó en especial las exportaciones mediante subsidios destinados a los grupos fabricantes de celulosa, aluminio o acero, los productores de aceite o golosinas y las empresas petroleras. Algunas de estas empresas instalaron las filiales en otros países y se

convirtieron en empresas multinacionales.

En cuanto al sector agrario, los precios internacionales mejoraron desde 1996 y alentaron la profundización de los cambios productivos. El motor estuvo en los cereales y las oleaginosas y fue el resultado de una combinación de nuevos procedimientos tecnológicos y formas de organizar la producción. Se incorporaron masivamente fertilizantes y herbicidas, lo que contribuyó a aumentar la productividad junto con el empleo de maquinarias de mayor envergadura y velocidad, la siembra directa y el uso de semillas transgénicas y del glifosato. Se generalizaron los *pooles* de siembra, que permitieron combinar de manera efectiva distintos factores de la producción. El *pool* reunía a diferentes inversores medianos, ajenos al campo, alquilaba tierras y maquinarias y colocaba a un profesional en su dirección. La frontera agraria comenzó a expandirse, superando los límites tradicionales de la pampa húmeda. La soja, las otras oleaginosas, los aceites y los cereales incrementaron significativamente las exportaciones del sector, que se asoció a los mercados asiáticos.

La eficiencia de este reducido sector industrial y agrario, no mejoró la demanda de empleo ni derramó sus beneficios al resto de la sociedad.

El Estado renunció a sus herramientas de control de la economía, así como se fue desentendiendo de sus funciones sociales. Transfirió su responsabilidad a los estados provinciales y hubo un deterioro en la calidad de los servicios.

El discurso neoliberal impuso en la opinión sus propuestas y su agenda de problemas. Todo el debate público se redujo a la economía y sobre todo a la “estabilidad”. Así, se abandonaron tópicos como el buen salario, el pleno empleo, el derecho a la salud, a la educación, la jubilación y, en general, a la igualdad de oportunidades.

Los cambios en la economía y en el Estado le dieron a la sociedad un perfil absolutamente diferente. La sociedad se polarizó, dejando ganadores, de un lado y perdedores, del otro. Mientras un vasto sector se sumergió en la pobreza o vio deteriorado su nivel de vida, muchos ricos prosperaron ostentosamente, de modo que las desigualdades no se disimularon. La sociedad se vio segmentada en partes incomunicadas, separadas por su diferente capacidad de consumo y de acceso a los servicios básicos y hasta por desigualdades civiles o jurídicas. En las ciudades se fue dando: deterioro de la infraestructura urbana y de los servicios, crisis del control y del orden público, ruptura del espacio urbano homogéneo y desarrollo de algunos espacios aislados –el *shopping*, el *country*, barrios privados- donde grupos reducidos creían vivir en un mundo ordenado, seguro, próspero y eficiente.

Las clases medias experimentaron una fuerte diferenciación interna, particularmente en sus ingresos. Las actividades o las profesiones dejaron de indicar con certeza la posición social. Los que lograron “salvarse” pudieron conservar su vivienda y su auto, mandar a sus hijos de una escuela paga, tener un sistema médico prepago y mantener las expectativas de transmitir su posición social a los hijos. Otros muchos pudieron mantener la respetabilidad a duras penas.

Pero un extenso sector de las clases medias se sumaron al mundo de la pobreza: empresarios medianos o pequeños, comerciantes o talleristas, abatidos en alguna de las crisis; empleados públicos despedidos o con sueldos disminuidos, como los docentes; profesionales proletarizados, como los médicos, o egresados universitarios sin empleo. Muchos tuvieron que poner un kiosco, manejar un taxi o desarrollar un emprendimiento original. Lo constante fue la vulnerabilidad con la que quedaron, pues a la precariedad laboral se sumó la pérdida de la atención médica o de la jubilación.

Se fue formando un extenso mundo de pobreza, sobre todo en el conurbano de Buenos Aires, y también en otros grandes conglomerados industriales, como el de Rosario. Los cambios laborales fueron decisivos: aumento del trabajo ocasional y del empleo informal o “en negro”, baja de los salarios y aumento de la desocupación son los datos generales. En el Gran Buenos Aires hacia 2000 el índice de pobreza variaba entre 25 % y 43 %, según la zona.

Asimismo, cambiaron los valores y los proyectos de vida. El mundo de los ricos y exitosos, profusamente exhibido por la televisión, puso en cuestión las expectativas de la antigua sociedad: para qué trabajar o ahorrar, para qué estudiar, para qué obedecer la ley, si había recompensa probable.

Por otro lado, la atención médica declinó espectacularmente. Los hospitales públicos se deterioraron por sus escuálidos presupuestos y por la concurrencia masiva de los pobres carentes de obras sociales sindicales. Si bien deterioradas, las escuelas fueron de las pocas instituciones estatales que permanecieron de pie. Se convirtieron en agencias múltiples, dedicadas a ofrecer alimentación, salud o contención familiar.

En cuanto a la seguridad, se fue dando manifestando una importante corrupción en la institución policial, en particular en la provincia de Buenos Aires, y algo parecido ocurrió con la justicia. La policía participó de los frutos del delito y hasta lo organizó. La “bonaerense” participó de actividades delictivas como el juego, la prostitución, el robo de autos y camiones, el tráfico de drogas y los secuestros.

Esta gran transformación tuvo efectos contundentes en política, sobre todo en el Gran Buenos Aires, de decisivo peso electoral. En las barriadas pobres, la sociedad se articuló en torno de un complejo universo de sociedades de fomento, juntas municipales, cooperativas, comunidades parroquiales, centros sociales y culturales, clubes de fútbol o comedores. En este entramado social surgieron “referentes”, con capacidad de establecer un cierto orden y ayudar en la solución de las situaciones de emergencia.

El peronismo se adecuó rápidamente a estos cambios y las unidades básicas fueron simultáneamente comedores, jardines o centros culturales. Punteros y referentes sociales articularon las redes políticas y sociales. En una zona de legalidad imprecisa y lealtades cambiantes, circularon empleos precarios, bolsones de comida, medicamentos, favores variados y alguna protección judicial o policial. Entre punteros y jefes barriales se negociaban contingentes de votantes.

En el resto de la sociedad pasó algo similar. A la desconfianza hacia las “ideologías” se

sumó el repliegue de la ciudadanía activa de 1983. La ciudadanía se fue reduciendo y los partidos perdieron vitalidad y representatividad. Las instituciones republicanas, restablecidas en 1983, se fueron resintiendo, sobre todo después de 1989. Las urgencias de la crisis y la idea de la jefatura del peronismo tensaron al límite la relación entre los poderes y se fue reestableciendo la vieja concepción de la democracia de líder. En la segunda mitad de la década de 1990, se advirtió un cierto renacimiento del espíritu ciudadano: las organizaciones de derechos humanos trabajaron sobre una brecha legal de la ley de obediencia debida –la sustracción de niños- que permitió retomar la acción legal contra algunos de los responsables. También hubo una acción militante por la construcción de una memoria colectiva más fiel a los principios de 1983. Se fue construyendo una lucha por la memoria y de a poco, una reivindicación de la lucha de los años setenta.

Cuando Menem llegaba al final de su segundo mandato, una nueva crisis internacional desequilibró el edificio económico e inició una larga recesión. La devaluación de Tailandia en julio de 1997 dio lugar a una serie de derrumbes –Corea del Sur, Japón, Rusia- que minó la confianza global en las “economías emergentes” y reorientó las inversiones hacia mercados más seguros. Otro golpe duro fue la devaluación de la moneda brasileña, a principios de 1999, que alteró las relaciones comerciales. Cayeron las exportaciones y hubo un aluvión de importaciones. Las empresas locales reclamaron protección y las más grandes consideraron la posibilidad de trasladarse a Brasil. La devaluación del peso era imposible por el régimen de convertibilidad.

La crisis fue muy profunda. Todo se sumó: aumento de los intereses de la deuda, escasez y alto costo del crédito, caída de los precios de productos exportables y recesión interna. En 1998, el PBI retrocedió alrededor de 4 % y la producción de automotores cayó casi a la mitad. Muchas empresas y bancos fueron vendidos a corporaciones multinacionales o a grandes fondos de inversión. Entretanto, la deuda externa había llegado a 160 mil millones de dólares, el doble que en 1994.

A partir de 1995, aumentaron las manifestaciones sociales y se hicieron más violentas y espectaculares. En 1996, mientras la CGT, el MTA y la CTA confluían para realizar dos huelgas generales contra la ley de flexibilización laboral y la política económica, la oposición política impulsó una protesta ciudadana consistente en un apagón eléctrico y un “cacerolazo”. La Iglesia cambió su anterior posición y empezó a sumarse a las protestas. En 1997, los gremios docentes instalaron frente al Congreso una “carpa blanca”, donde desarrollaron una protesta de gran repercusión en los medios, sin interrumpir las clases. Surgieron los “piqueteros”, identificados por una forma novedosa de protesta: el corte de ruta. Este fenómeno se inició en lugares como Cutral Có, en Neuquén, Tartagal o General Mosconi, organizado por trabajadores despedidos por YPF. En muchos casos, fueron reprimidos duramente en varias ocasiones; en otros, se trató de negociar con ellos. La organización de los desocupados también se desarrolló en el Gran Buenos Aires. En La Matanza, la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y la CTA impulsaron los reclamos de los

desocupados, y lo mismo hizo la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La perspectiva de las elecciones presidenciales de 1999 generó internas dentro del peronismo mismo, donde empezó a cuestionarse la “gran transformación”. El gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, tomó distancia del “modelo” y reivindicó las banderas históricas del peronismo. Mientras tanto, Menem intentó jugar la carta de otra reelección y lanzó su candidatura de manera informal.

Se inició una guerra violenta entre ambos, y salieron a la luz hechos de corrupción que unos y otros hacían circular para perjudicar al otro bando. Se difundieron episodios como la venta clandestina de armas a Croacia y a Ecuador, sobornos de la empresa IBM a los directores del Banco Nación, entre otros. Se trató de un “destape” que instaló el tema de la corrupción en la agenda pública. La Policía Bonaerense apareció implicada en varios casos de delincuencia, incluido el atentado a la AMIA. Poco después estalló el “caso Cabezas”: el asesinato de un periodista gráfico, por orden del empresario Alfredo Yabrán, con complicidad de la Bonaerense, quien se suicidó antes de ser capturado.

En octubre de 1997 el justicialismo sufrió una fuerte derrota en las elecciones legislativas, perdiendo incluso en Santa Fe y Buenos Aires. Duhalde quedó maltrecho y Menem impulsó su reelección, pero la Justicia declaró finalmente que su proyecto era ilegal.

En 1995, el Frepaso había tenido en su debut un promisorio desempeño en las elecciones presidenciales, aunque casi en seguida se alejó su candidato presidencial, José Bordón.

El Frepaso recogió distintas aspiraciones del momento: la renovación de la política y de los hombres y la constitución de una fuerza de centroizquierda, alternativa de los dos partidos tradicionales. Sin repudiar de raíz las políticas de los noventa, puso el acento en los problemas sociales en las cuestiones éticas y políticas: la corrupción y el deterioro de las instituciones.

La UCR logró superar los efectos de la presidencia de Alfonsín y obtuvo algunos éxitos electorales significativos, sobre todo con Fernando de la Rúa, electo en 1996 primer jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 1995, la UCR y el Frepaso iniciaron conversaciones para concertar su acción y avanzar hacia una alianza formal.

En 1997 crearon la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación y obtuvieron un triunfo notable en las elecciones legislativas.

Mientras el justicialismo se desgarraba en su lucha interna, la Alianza avanzó hacia el triunfo en 1999. Como la mayoría de la opinión tenía puesta su fe en la convertibilidad, se acordó no cuestionarla y poner el acento en la equidad social, las instituciones republicanas y la lucha contra la corrupción. En las elecciones internas, ganó la fórmula Fernando de la Rúa – Chacho Álvarez.

En las elecciones de octubre de 1999, De la Rúa y Álvarez obtuvieron un triunfo claro: el 48,5 % de los votos, casi diez puntos más que Duhalde.

De la Rúa recibió un poder limitado en lo político (la Alianza gobernaba sólo seis distritos y era minoría en Senadores) y condicionado por la crisis económica, que seguía su desarrollo.